

## Historia u olvido. ¿Qué hacer en Euskadi?

Luís Castells

El olvido, y hasta diría yo que el error histórico, son un factor esencial en la creación de una nación, de modo que el progreso de los estudios históricos es a menudo un peligro para la nacionalidad. (E. Renan)

En un reciente artículo, uno de los intelectuales de más prestigio en Euskadi, José María Ruiz Soroa, llamaba la atención sobre el énfasis que pone el lehendakari Urkullu en presentar a la sociedad vasca como *modélica*, con una cultura y valores ejemplares. Es la recuperación más humilde del narcisista discurso de Ibarretxe cuando en sus tiempos de lehendakari situaba a Euskadi en la *vanguardia* de un sinnfín de iniciativas (*Debate sobre política general*, 2008). Pues bien, frente a tanta visión idílica y de un recreado *oasis* vasco, Ruiz Soroa remarcaba la omisión de una circunstancia clave en el devenir de la sociedad vasca como ha sido su indiferencia frente al terror y la violencia (*Fundación para la Libertad*, 27-12-2014). Venía a remarcar la generalización del olvido como práctica *banal* y extendida en la Euskadi de hoy en día.

La sociedad vasca se enfrenta a un momento especialmente importante: finalizada, como parece, la actividad terrorista, es el momento de evaluar su pasado reciente, de edificar su proyecto de sociedad sobre la base de tener que gestionar y hacer frente a un período especialmente doloroso de su historia, en la que el asesinato y la violencia han formado parte del escenario colectivo. Nada nuevo por otra parte: tras periodos traumáticos, toda sociedad se ve en la necesidad de prestar atención a lo ocurrido, de tratar de extraer las enseñanzas debidas para evitar caer en los mismos males. Por muchas vueltas que se le dé, y por muy escépticos que seamos sobre el tema, no cabe duda de la *utilidad* de la historia en la conformación de la sociedad. Como nos ha recordado recientemente MacMillan, en dos acontecimientos de gran impacto como la reconstrucción del mundo tras la Segunda Guerra Mundial o la recesión económica iniciada en 2008, las reflexiones sobre la historia han estado muy presentes. Lo mismo cabe decir acerca de la transición española, en la que el recuerdo de la historia —no su olvido— fue decisivo en las características que adoptó y en las políticas asumidas por los líderes de aquel proceso.

Bien es verdad que en el caso vasco, la revisión del pasado cercano encaja en otro tipo de modelos relacionados con el papel central desempeñado por el terrorismo, entendido este como una violencia clandestina con el doble objetivo de forzar la voluntad del Estado, así como coaccionar y atemorizar a la población discrepante. Su trágico efecto es conocido: 845 víctimas mortales. A este terrorismo, encarnado por ETA y grupos afines, se le añadía otro, mirado con simpatía por el Estado o

directamente auspiciado por él, según la etapa a que nos refiramos. En este caso hubo una primera fase representada por una variedad de siglas (GAE, BVE, Triple A) que va de 1975 a 1981, en la que la confluencia de la extrema derecha y fuerzas policiales resultaba obvia y cuyas acciones se saldaron con 42 asesinatos. A esta le siguió una segunda etapa, que se extendió entre 1983 y 1987, representada por el GAL, con la probada complicidad del Estado, que ocasionó 27 muertes. Ha sido, pues, una situación cruzada por varios terrorismos, aunque de desigual intensidad y calado social, pero cuya existencia ha propiciado lecturas deformadas e interesadas en el sentido de inventarse una simetría de la violencia. Para calibrar la entidad de cada uno, baste con el dato de que a ETA y grupos afines les corresponden el 92% de los asesinatos cometidos por el terrorismo de distinto signo, en tanto que el representado por los ultras o parapolicial supone el 7%.

Este breve apunte no hace sino significar la peculiaridad del terrorismo padecido en nuestro caso. Es peculiar porque frente a lo vivido en algunos países de América Latina bajo regímenes dictatoriales (Argentina, Uruguay, Chile...), el terrorismo de ETA se ha desarrollado en buena parte dentro de un Estado democrático y atentando contra él. Es también diferente de lo sucedido en Irlanda del Norte, pues en Euskadi no ha habido dos comunidades violentas enfrentadas, sino que solo una de ellas, la que amparaba a ETA, ha apoyado y legitimado el uso del terror.

Por tanto, el relato que se haga de esa historia reciente de Euskadi deberá tener en cuenta ese escenario, recoger todos los hechos referidos y que las diversas voces puedan encontrar su expresión. Promover, pues, una visión compleja y contextual como vía para dar cuenta de lo acaecido. Hay en este punto, y tal como apuntábamos, un consenso en la sociedad vasca sobre la necesidad de abordar su pasado, de encararlo con el fin de empezar un tiempo nuevo. Está así instalada en el País Vasco una cierta «pasión» por el pasado, pues sigue presente en su devenir, asumiéndose que hay una cierta obligación moral de revisar críticamente nuestra historia (*reconocer el daño causado*) para poder abordar con solidez el futuro. Como decía recientemente el PNV (EBB, 26-1-2015), «una Nación sin convivencia es un experimento fallido. Debemos, por lo tanto, cerrar definitivamente la página negra de la violencia que ha fracturado a nuestra sociedad durante decenios». Parecería, pues, que la historiografía debiera ser reclamada por los poderes públicos a fin de esclarecer como ha sido ese cercano pasado y cerrar página —*cancelar el pasado*— desde el rigor metodológico en un período especialmente doloroso de la historia de Euskadi. Contribuir desde el ámbito histórico a gestionar ese proceso tan complejo del *trabajo del duelo* que la sociedad vasca, o una parte de ella, ha de pasar. Sin embargo, las políticas públicas acometidas en Euskadi apuntan en una dirección bien distinta.

En buena medida, la historiografía académica está siendo ninguneada por los poderes públicos vascos (Gobierno Vasco y diputaciones forales especialmente), que a la hora de abordar el tratamiento de la historia reciente y sus consecuencias, se encomiendan a diversas disciplinas, entre las que no suele contarse la historia: psicólogos, criminólogos, forenses, «profesionales» del «conflicto»... Ocasionalmente, se cuenta con algún historiador, pero se busca el perfil de historiador-cortesano que ratifique el discurso que desde los poderes públicos se alienta. Aun más

incidentalmente se puede encomendar desde estos ámbitos algún estudio a la historiografía académica, pero en tal caso es entendido como algo sobrevenido y obligado por la fuerza de los acuerdos gubernamentales entre distintos. En este último caso, se deja patente, vía presupuestaria, que su opción preferida es la antes señalada, ese conglomerado de forenses-criminólogos-psicólogos, que es dotada con un sustancioso apoyo financiero.

¿A qué se debe esta marginación de la historiografía cuando a la par se reclama la necesidad de reflexionar sobre la reciente historia? La respuesta es sencilla: la historia propone el estudio del pasado basado en su revisión crítica y fundamentado en la *búsqueda de la verdad* (MOMIGLIANO) y, por lo tanto, no puede subordinarse a las convenciones sociales ni a los criterios de los poderes; no debe proporcionar un relato acomodaticio según los intereses del momento ni subordinarse a las políticas públicas. Con referencia a Euskadi, asumir esas exigencias pasa por explicar con toda su crudeza el terrorismo y los comportamientos políticos y sociales habidos ante esta lacra, y de los cuales el *establishment* político actual, en este momento copado por dos opciones nacionalistas (PNV-Bildu), no sale bien parado, aunque por muy distintas razones. En el caso del radicalismo abertzale por su absoluta connivencia; en lo que atañe al Partido Nacionalista Vasco, por su timorata postura y tardía reacción ante ETA.

Entre estas dos formaciones hay puntos de confluencia a la hora de encarar sus políticas sobre el pasado cercano, pero también profundas discrepancias. Entre estas últimas, la más tajante es la reivindicación de la izquierda radical de su trayectoria histórica. En sus habituales términos ambiguos, el presidente de Bildu, Asier Harraiz, declaraba que «hace 35 años la izquierda abertzale hizo una elección que consideramos hoy más que nunca acertada. Y no estamos dispuestos a rechazar ni a revisar nada de aquello y reivindicamos, con todos nuestros errores, lo que fuimos y lo que somos, y lo que hemos hecho y lo que hacemos, como no podía ser de otra manera» (noviembre de 2013), para posteriormente apostillar que «la lucha de la izquierda abertzale ha merecido la pena» (enero de 2015). Se emplea ese lenguaje polisémico en el que se dice sin decir, con el que se evoca aquello que es palpable en el imaginario colectivo: la indudable vinculación entre ETA y la izquierda abertzale. Esta reivindicación de su trayectoria es uno de los problemas del mundo que viene de la violencia y que hoy encarna Bildu, pues su narrativa identitaria le une de modo inextricable con el pasado, está atrapado por él, y es incapaz de desligarse de un capital simbólico en el que ETA emerge como pieza central. Este sector se ve así en la necesidad de tener que hacer frente al relato, pero sobre la base de elaborar una versión *ad hoc*, de construir una narrativa justificadora de un recorrido en el que ETA emerge como una organización heroica y defensora del pueblo vasco.

Puestas así las cosas, el interés del radicalismo abertzale por la Historia, entendida esta como una disciplina que busca un conocimiento riguroso del pasado y con un deber de veracidad a través del contraste empírico, de la *prueba* (GINZBURG), es mínimo. Frente a las exigencias epistemológicas que establece la disciplina histórica, su perspectiva se sitúa en el polo opuesto entendiendo que la

historia debe someterse a un fin superior, que en su caso es la *construcción de la nación vasca* (*Euskal Memoria*), dotándola de este modo de un fin propagandístico conforme a unos objetivos políticos. Se prefiere asimismo que la historia que se elabore esté libre de ataduras académicas —ámbito al que se vendría a tildar peyorativamente de *erudito*—, pues estas exigen un rigor y una fundamentación, que están lejos de las interpretaciones históricas provenientes de este mundo. Ponemos algún ejemplo.

En 2013 se conmemoraron en San Sebastián los doscientos años de la destrucción de la ciudad por las tropas anglo-lusas. En 1813 San Sebastián era una plaza militar, controlada por las tropas napoleónicas, que soportó un largo asedio del ejército aliado al mando de Wellington. Finalmente, el 31 de agosto los batallones británicos y portugueses lograron vencer la fuerte resistencia de los franceses y ocuparon la ciudad, sucediéndose a continuación una serie de desmanes del ejército triunfante sobre la población civil, a la par que se incendiaban los edificios que quedaban en pie, a consecuencia de lo cual San Sebastián quedó arrasada. No fue un hecho aislado, pues esas mismas tropas, en su avance desde Portugal, cometieron parecidos abusos sobre la población tanto en Ciudad Rodrigo como en Badajoz, tras los respectivos asedios que padecieron. Pues bien, doscientos años después la potente maquinaria del radicalismo abertzale se puso en acción para utilizar ese triste suceso. ¿Cómo podía hacerlo si fueron tropas extranjeras las protagonistas y no hubo intervención del ejército español, que precisamente ese mismo día obtuvo a escasos kilómetros unos de sus escasísimos éxitos militares en la batalla de San Marcial? Esta circunstancia no amilanó a nuestros propagandistas que, para la ocasión, se transmutaron en historiadores (*¿*). Pues bien, desde plataformas alentadas por el Ayuntamiento de la ciudad en manos de Bildu, se difundió una versión disparatada, cuyo objeto era remarcar la responsabilidad en la destrucción de la ciudad de dos generales españoles —bien subrayada esta condición—, presentando a la vez este hecho como un nuevo *genocidio*, otro *holocausto* que han padecido los vascos. Al final, el propósito era subrayar la condición de víctima del pueblo vasco, representado como un colectivo ya entonces ¡nacionalista!, frente a la opresora España. El nulo rigor de lo expuesto, las patadas a la historia, no importaban pues al fin y al cabo lo que se buscaba era alimentar una determinada memoria colectiva que reforzase ese mito del conflicto secular entre España y Euskadi, y socializar esa idea a través de sus potentes aparatos propagandísticos, que no se recataron en divulgar esa fabulación.

Como apuntábamos antes, tampoco el PNV se siente cómodo cuando tiene que revisarse la historia cercana de Euskadi y su posición ante el terrorismo etarra. Este partido ha tenido una especial responsabilidad política habida cuenta que desde la constitución del primer Gobierno Vasco, en 1980, ha estado al frente del ejecutivo con la excepción de la etapa López. Pues bien, su posición frente a ETA en aquellos primeros años de gobierno fue ambivalente o cuando menos no suficientemente contundente, postura que se prolongó durante un cierto tiempo. Se condenaban las acciones de ETA, pero a la par las inscribían en un contexto caracterizado por el canon del *conflicto político* secular que enfrentaba a Euskadi con España, lo que

venía a implicar una cierta comprensión de sus actividades. Se entendía que si el Estado adoptaba medidas políticas de reconocimiento de la soberanía que le correspondía a Euskadi, ETA desaparecería. De este modo, hubo que esperar a 1985 para que, tras el asesinato del oficial de la Ertzaina Díaz Arcocha, el gobierno vasco reconociera por primera vez la legitimidad de la acción policial y judicial en la persecución del terrorismo (DOMÍNGUEZ); pero la falta de empatía hacia las víctimas como ejercicio cotidiano permaneció. Un paso importante en la trayectoria del PNV en relación con el terrorismo fue el pacto de Ajuria Enea en enero de 1988, ya con Ardanza al frente del ejecutivo, que supuso el abandono por parte del PNV del tono de ambigüedad que le había caracterizado. Pero que el camino era quebrado se puso de manifiesto diez años después con el arreglo de las fuerzas nacionalistas en el Acuerdo de Estella, que resucitaba la idea de que ETA no era tanto el problema sino el síntoma del *conflicto vasco* y que en consecuencia se trataba de poner fin a éste para propiciar su paulatina desaparición. Así, la recuperada tentación soberanista volvió a restablecer puentes en la comunidad nacionalista, compartiendo una misma *gramática del conflicto* (ALONSO). Aunque luego la contumacia terrorista de ETA (ruptura de la tregua del 98) motivó que el acuerdo se rompiera, subsistió en el nacionalismo la confluencia en la idea del conflicto como clave explicativa, quedando además entretanto sucesos tan dolorosos como la distancia emotiva mostrada por el PNV hacia las víctimas con ocasión del asesinato de Fernando Buesa (2000). Motivos, pues, no le faltan al PNV para percibir que el juico que puede merecer su actitud frente al terrorismo no es lo favorable que desearían, lo que puede ayudar a situar su escaso compromiso con la promoción de análisis rigurosos de la historia cercana de Euskadi.

Ese desencuentro del PNV con la Historia corre pareja con el intento de su manipulación. Así, frente a esta visión crítica con respecto a su actitud ante ETA, el PNV suele contrarrestar esta idea subrayando que fueron ellos el primer partido que convocó una manifestación contra ETA, en octubre de 1978. Sin embargo, no son ciertas ni la primera afirmación (que fue la primera), ni la segunda (que fue contra ETA). Antes que esa manifestación, el PC de Euskadi había promovido varias concentraciones de repulsa tras asesinatos de ETA, la primera de ellas en junio de ese año, tras la muerte del periodista Portell. Pero es que además la historia de esa convocatoria de octubre tuvo unos prolegómenos que reflejaban las dificultades del PNV a la hora de gestionar internamente el tema de ETA. Si inicialmente la voluntad de la dirección jeltzale fue promover una gran manifestación contra *el terrorismo*, la reacción hostil de sus bases obligó a cambiar la convocatoria, eliminando la referencia al terrorismo por otra más genérica: *contra todo tipo de violencia*, variación no solo semántica, pues daba pie a que de paso se hiciera corresponsable al gobierno de la UCD del terror que se vivía en Euskadi. No en vano, decía el órgano máximo nacionalista, «que el origen de las expresiones de terror y violencia está centrado en la opresión sufrida por nuestro pueblo y ejercida desde hace 140 años por el poder central y las instituciones derivadas del mismo». En consecuencia, el PNV invitó a UCD a no acudir a esa manifestación *debido a su elevado tanto de responsabilidades* sobre tal violencia. Finalmente, la manifestación tuvo el lema polisémico de

«Por una Euskadi libre y en paz», para hacer público su rechazo a todo tipo de violencia y reivindicar una solución política al problema vasco. Ninguna mención a ETA y sí a una solución política, desvirtuándose lo que había sido la propuesta inicial de señalar a ETA como responsable de la violencia que se padecía.

A la hora de encajar el desapego hacia la historiografía por parte de las instituciones públicas vascas hay que sumar un factor sustancial como es la difícil relación entre el poder y la historia. Es un lugar común señalar la tendencia por parte de las administraciones a usar la historia, a utilizarla creando una narrativa pública oficial conforme a sus intereses. El caso de Euskadi no escapa a esta tendencia, todo lo contrario. No nos referimos en este punto al uso y abuso de la historia con el que dar cuerpo a las aspiraciones políticas nacionalistas, sino a cómo desde el *establishment* se orienta acerca de cómo debe ser expuesto e interpretado el pasado, y en este cruce de caminos la Historia como disciplina puede resultar un estorbo. En el caso que tratamos, para relegarla o cuando menos difuminarla, se dan varios pasos. Uno de ellos es sustituir la Historia por la memoria. No se trata en este caso de emplear dos herramientas que pudieran ser complementarias para acercarnos al pasado, sino de desplazar la Historia por un instrumento metodológicamente lábil y manipulable como es la memoria, entendida en este caso como recuerdo personal, pero sobre todo porque es una vía que sirve para la «instrumentalización del pasado en el presente» (NORA). Se encuentra de este modo, a través de la preeminencia concedida a la memoria, un recurso que permite proporcionar un relato de la historia según convenga a los fines políticos e identitarios correspondientes y sin las ataduras que la Historia exige en cuanto a veracidad y contraste. A este respecto, Bildu mantiene una decidida voluntad de intervenir en el campo historiográfico creando una versión *ad hoc* en base a lo que denominan *preservar la memoria popular*, poniendo en pie una narrativa en la que lo sustantivo no es el rigor sino alimentar su discurso político justificador de la violencia de ETA.

En otro orden de cosas, la Administración vasca está promoviendo unas políticas con la legítima intención de crear un nuevo marco que supere la violencia y la fragmentación de la sociedad. Con este objeto, pone el énfasis en la socialización de una serie de ideas-fuerza que son irreprochables en su formulación: reconciliación, consenso, superación del odio, encuentro social, visión compartida.... Tal hecho no representa ninguna novedad y es la práctica común de los gobiernos una vez superados momentos de fractura. En Euskadi, desde los ámbitos nacionalistas esos términos han adquirido la categoría de tótems y son considerados como los ejes de la nueva convivencia a los que deben subordinarse otras consideraciones, como puede ser el relato del pasado reciente. Se entiende así que esa narrativa no debe obstaculizar tales procesos de encuentro, entre los que la reconciliación o la convivencia ocupan un lugar preferente, de manera que la historia que se exponga contribuya a ese objetivo. Se reclama de este modo atemperar la narrativa, suavizarla en aquellos aspectos que resulten más conflictivos, en la idea que la *memoria* que se construya sea *útil* y contribuya a la *realización del bien común*. El mensaje implícito es adecuemos el relato histórico si eso conviene a un fin moral superior como es el restablecimiento de la convivencia.

En esa misma dirección de dotar una narrativa de sentido se encuentra el hecho de desvirtuar el fenómeno terrorista, que es observado a través de las víctimas, pero consideradas estas bajo una perspectiva individual y despolitizada. Se las pone en el foco central, sí, pero sobre la base de tratarlas en su condición sufriente, desde su legítimo dolor, sustrayéndoles su naturaleza de víctimas políticas, de personas que tienen esa condición debido a acciones promovidas desde el fanatismo político e ideológico. Se centra la reflexión en las reparaciones emocionales personales y se evita hablar de las situaciones que se han vivido en Euskadi, de los contextos en los que ese colectivo sufrió una persecución, a veces social, que acabó con la vida de cientos de personas. Se elude, en suma, la historia y el relato del dramatismo en el que una parte de la sociedad vasca se ha tenido que desenvolver como resultado del acoso de ETA y de la comunidad de los violentos, y se busca, por el contrario, proporcionar una visión del reciente pasado estilizada, en una suerte de simetría del dolor *de los dos lados*, todo con el objeto de propiciar ese icono llamado *reconciliación* o en su defecto el *encuentro*. Es un proceso similar al que llevan tiempo viviendo en Irlanda del Norte, en cuyo caso el signifiante canonizado es el *moving on* (MCGRATTAN). En Euskadi, como en Irlanda del Norte, se prefiere centrar la reflexión en torno a la idea de reconciliación, que puede pecar de imprecisa y manipulable (la viuda de un asesinado —Maixabel Lasa— dice que las víctimas no se enfrentaron a nadie), eludiéndose mostrar con el suficiente vigor la repulsión hacia el terrorismo padecido y ahondar, por ejemplo, en las culturas de la violencia de las que se alimentó ETA. Todo ello viene acompañado por una ceremonia de la confusión, de manera que se incluye bajo la categoría de víctimas a personas de muy distinta consideración, desde los asesinados hasta los que han padecido algún tipo de agresión política, en una suerte de equiparación ética reprobable y penalmente insostenible. Se mezcla terrorismo con vulneración de derechos humanos, no se diferencia violencia y terrorismo, en un camino con el que se acaba construyendo un relato desfigurado de nuestra reciente historia, poniendo en pie una *verdad acomodaticia* o *comfortable* que denunciara Primo Levi.

Hay que aceptar que el recuerdo no tiene un efecto balsámico, y más cuando se trata de la memoria del terror, pudiendo generar más fractura que recomposición. Es un dilema conocido que se les presenta a los estados democráticos, especialmente tras períodos convulsos, que se debaten entre la crudeza de abordar el pasado con su brutalidad o practicar una «cuenta cero», hacer tabla rasa de lo sucedido y sentir el placebo del olvido. Ahora bien, el *let bygones be bygones* (lo pasado pasado está) que por ejemplo impulsó Mandela en Sudáfrica, se hizo tras una etapa de exhaustivo recuerdo, de que aflorasen los horrores vividos; solo entonces se reclamó el olvido. Promover el olvido, la negación del pasado, solo trae que este siga pesando, que continúe estando presente pero además como culpa, como incapacidad de una sociedad para examinarse y determinar las responsabilidades que a cada uno le competen. Por eso, conviene volver a recordar lo que nos dejó dicho Primo Levi:

«No es lícito olvidar, no es lícito callar. Si nosotros callamos, ¿quién hablará? No por cierto los culpables y sus cómplices. Si faltase nuestro testimonio, en un futuro

no lejano las proezas de la bestialidad nazi, por su propia enormidad, podrían quedar relegadas al mundo de las leyendas. Hablar, por tanto, es preciso.»

Pero sigue: «Y sin embargo prevalece el silencio. Es un silencio que es fruto de una conciencia insegura, o incluso de la mala conciencia...».

¿Reproduciremos estas últimas palabras y con ellas su denuncia hacia aquellos que tratan *por todos los medios de desviar la discusión?*